

Problema jurídico

¿Dentro de los organismos de Tránsito Departamentales, como se garantiza la segunda instancia cuando proceden los recursos de Reposición y Apelación, de qué forma se debe jerarquizar la entidad a fin de poder garantizar el Debido Proceso, dentro de los procesos contravencionales en aquellos Institutos que no cuentan con inspectores de tránsito, quien sería el competente para resolver el Recurso de Apelación?

Solución

la normatividad aplicable a la interposición de recursos dentro del procedimiento contravencional -aludida en su escrito- es explícita, subrayando que la ley aplica para todo el territorio nacional y en consecuencia, no existen excepciones para desatender lo dispuesto en el ordenamiento legal, señalando para el caso examinado, que frente a las decisiones emanadas en primera instancia por los Organismos de Tránsito del nivel municipal y/o departamental, en los eventos que procede la segunda instancia, esta quedaría a cargo de las Alcaldías y/o las Gobernaciones, respectivamente, o en quien estas autoridades deleguen.

Así mismo, respecto a los términos establecidos para resolver recursos por parte de las autoridades de tránsito, es ilustrativo invocar el inciso segundo del artículo 161 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (modificado por la Ley 1483 de 2017, artículo 11), a saber: “La decisión que resuelve los recursos, de ser procedentes, deberá ser expedida en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición, si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente.”

De otro lado, es pertinente subrayar que en el evento de no existir Organismo de Tránsito en la población en la cual se impusieron las ordenes de comparendo nacionales, entonces avocará el trámite administrativo el Organismo de Tránsito Departamental de la misma jurisdicción.

No obstante, de ocurrir que determinados departamentos no tengan Organismo de Tránsito Departamental sino solamente sedes de tránsito operativas, entonces se deduce aplicar lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 6º de la Ley 769 de 2002, el cual establece la posibilidad de suscribirse convenios interadministrativos para coordinar conjuntamente el cumplimiento de las competencias de los entes de tránsito municipales -colindantes y/o adyacentes unos de otros-.

[Concepto 20171340415251](#)